

Apuntes sobre Catastro. Perspectiva de futuro

INMACULADA
TURÚ SANTIGOSA

Hasta hace relativamente poco tiempo, era habitual una cierta confusión, incluso una identificación, entre el Catastro y la Contribución Territorial Urbana, Impuesto sobre Bienes Inmuebles a partir de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Parte de esta confusión estaba provocada involuntariamente por el mismo legislador, ya que todas las medidas de cierta categoría normativa, vinculadas al Catastro estaban situadas dentro de la regulación económico-financiera municipal, concretamente en el ámbito de la CTU (véase RDLL 781/86, Texto Refundido de Normativa Local).

Finalmente, ha sido también una norma de esta naturaleza la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, la que ha realizado una definición de qué es el Catastro, qué es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la relación que existe entre ambos conceptos y qué Administraciones son competentes en cada una de las materias.

En síntesis, el Catastro es un conjunto de información sobre las características físicas, jurídicas y económicas de la estructura inmobiliaria (DA.4).

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo local de carácter real que grava el valor de los mencionados bienes (art. 61). Su base imponible es su valor catastral (art. 66).

La gestión catastral corresponde a la Administración del Estado (Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria), y puede ser ejercida directamente o mediante convenios con las Entidades Locales (art. 78.1).

La gestión tributaria del Impuesto corresponde a las Corporaciones Locales (art. 78.2).

El Padrón del Impuesto se gestiona a partir del padrón catastral, que identifica los bienes a incluir, respecto de los cuales imputa el valor correspondiente y determina los obligados al pago (art. 77).

Lo que es realmente significativo de este conjunto de normas es la separación nítida de conceptos, a partir de la cual podemos afirmar que *el Catastro es básicamente un conjunto de información, recogida en soportes tanto alfanuméricos como gráficos de la estructura de la propiedad inmobiliaria, de sus características físicas, jurídicas y económicas, y que tiene o puede tener usos diversos, de carácter tributario unos, los más conocidos y habituales hasta ahora, y extratributarios otros.*

Esta acepción supuso, de hecho, elevar a norma lo que hacía tiempo sentían las administraciones implicadas, e introdujo como elemento nuevo la relación obligatoria de la valoración catastral con el valor de mercado.

Un conjunto de información como el que recoge el Catastro, difícil de conse-

guir y de mantener, gestionado por un Organismo que tiene ésta como única función principal, tan sólo tiene sentido si es una información verídica, completa, fiable y útil para la propia Administración y para la sociedad.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 39/88, el mundo del pensamiento, lo que se quería y se tenía que hacer, ya estaba completamente definido. El camino que debíamos trazar para llegar a él era tan interesante como complejo. La situación de partida era heterogénea, pero había una ventaja fundamental que facilitaba el trabajo: una identificación clara de los objetivos, motivo y justificación de nuestra función.

Esta filosofía está expuesta explícitamente por el Secretario del Estado de Hacienda, Presidente del CGCCT, en la presentación de la memoria del organismo de los ejercicios 87-88; que parcialmente se transcribe a continuación: «España, a diferencia de los países de nuestro entorno, no ha conseguido, hasta hace dos años, poner en marcha un instrumento esencial de conocimiento de la extensión, distribución y valor del patrimonio inmobiliario nacional. Me estoy refiriendo al Catastro...

Pero centrándonos en el uso fiscal del Catastro y para entender mejor la importancia de su renovación es conveniente subrayar un hecho determinante

de nuestro sistema tributario: la pluralidad de impuestos para los que el conocimiento de la propiedad inmobiliaria es componente esencial. Son figuras tributarias cuya determinación y gestión corresponde no sólo a la Administración Central, sino también a la Municipal y Autonómica.

Esta situación exige armonizar los distintos tributos para que la carga fiscal que soporta la propiedad inmobiliaria, se pueda repartir de modo equilibrado favoreciendo así la justicia distributiva y eficacia del sistema tributario global. Pues bien, la renovación del Catastro es un paso previo y necesario para que se pueda responder al reto que representa la definición de esta política. Una renovación que implica que el Catastro se elabore con auténtico rigor, con criterios homogéneos, con fiabilidad y capacidad de actuación permanente...

Pero como ya apuntaba antes, un inventario de nuestra riqueza inmobiliaria de las características señaladas no puede ser sólo utilizado como plataforma de una mejor estructura tributaria. De hecho tanto las Administraciones Públicas como las empresas privadas y los ciudadanos pueden y deben aprovechar esa fuente de datos como base de su propia actuación. El Catastro dibuja la topografía de una realidad sobre la que ya es posible el diseño ajustado de estrategias sociales y económicas, políticas de inversión industriales, comerciales o de simple interés privado que permitirán una más acertada distribución de los recursos y por lo tanto un sólido apoyo al progreso general de la sociedad».

Lo que se necesitaba hacer para actualizar la información era susceptible de presentarse agrupado en tres grandes bloques:

Inclusión de todas las fincas. Actualización de datos físicos y jurídicos.

Por diversas razones, básicamente vinculadas a la insuficiencia de recursos materiales y humanos, durante los

últimos años no se había producido un mantenimiento de los datos, mantenimiento que si siempre es necesario, ante el gran dinamismo del sector inmobiliario se convirtió en imprescindible.

La constante evolución del sector, que vivió momentos de crecimiento de gran importancia durante la década de los 80, junto con el considerable esfuerzo del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria para detectar omisiones y tramitar con agilidad la documentación, produjeron un incremento llamativo de las unidades en tributación, que pasaron de 14.377.515 (año 1984) a 20.665.514 (año 1990).

Actualización de los valores.

Hasta la entrada en vigor de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, la referencia del valor catastral al valor de mercado era absolutamente residual y subsidiaria. Las valoraciones se realizaban siguiendo criterios puramente administrativos, establecidos alrededor del rendimiento óptimo del terreno en función de las condiciones de uso y volumen establecidos por el planeamiento (art. 267 del RDLL 781/86).

Es la mencionada ley la que rompiendo con el esquema anterior, obliga a una valoración vinculada esencialmente con el valor de mercado (art. 66.2).

Este hecho es mucho más importante que un cambio ordinario de criterios de valoración, más o menos complejo, ya que supone, implica y plasma una variación en la esencia, en la filosofía.

El Catastro, y por tanto sus valoraciones, quiere dejar de ser una administración bastante cerrada en sí misma, dedicada a procesos fundamentalmente internos y utilizados exclusivamente para dar apoyo a parte de la tributación existente sobre los bienes inmuebles (tributación que al tener sus bases imponibles desvinculadas de la realidad, difícilmente cumple el principio constitucional de contribución a los gastos públicos en función de la capacidad económica) y

se quiere configurar como un organismo que recoge información de los bienes inmuebles, capta sus características y sigue su evolución, íntimamente vinculada a la realidad, con la labor de observarla, capturarla, cuantificarla y darle forma administrativa.

Una vez finalizado este proceso, el producto que obtiene, en forma de información lo pone a disposición de las administraciones y de la sociedad.

Este cambio de filosofía, plasmado en las correspondientes modificaciones normativas, exige una actualización masiva de los aspectos económicos de la información para adaptarlos a los valores de mercado.

La situación de partida, relación valor catastral/valor de mercado, era diversa y heterogénea, marcada tanto por el año en que se realizaron las primeras revisiones, como por la evolución del mercado inmobiliario en cada una de las zonas. Este hecho perfectamente comprensible a nivel intuitivo, se refleja claramente en los datos de valor catastral medio por unidad urbana de los municipios del entorno metropolitano de Barcelona de los ejercicios 1984 y 1990 que figuran en el cuadro 1 y demuestran la ineludible necesidad de proceder a su homogeneización.

Actualización de soportes.

Las primeras revisiones se efectuaron normalmente con efectos a mediados de la década de los 80. En aquel momento el uso de la informática dentro de la administración no era general. Como resultado de los trabajos se generaron padrones cobratorios, con soporte magnético estándar y una documentación en papel que recogía las características de los inmuebles.

En algunos casos, se contrató esta información catastral en soporte magnético, que no tenía ni un único diseño ni, lo que es más importante, una aplicación instalada en las Gerencias que fuera capaz de articular y garantizar su mantenimiento.

Cuadro 1
Valor catastral medio en el ámbito metropolitano de Barcelona
(en miles de pesetas)

Municipio	1984	1990	1992
Badalona	1.497	2.177	2.416
Barcelona	3.377	4.680	5.129
Castelldefels	1.768	3.903	4.327
Cerdanyola del Vallés	1.486	6.512	7.17
Cornellà de Llobregat	991	4.711	5.154
Esplugues de Llobregat	1.271	3.098	3.616
Gavà	1.022	4.003	4.491
L'Hospitalet de Llobregat	1.323	2.977	3.28
Molins de Rei	1.231	6.895	7.437
Montcada i Reixac	1.160	2.839	3
Montgat	1.878	4.929	5.454
Pallejà	1.368	3.499	3.855
Papiòl, El	1.376	3.255	3.844
Prat de Llobregat	1.492	3.708	4.112
Ripollat	922	5.103	5.329
Sant Adrià del Besòs	1.381	2.223	2.496
Sant Boi de Llobregat	1.367	2.539	2.855
Sant Climent de Llobregat	843	2.970	3.274
Sant Cugat del Vallés	1.431	3.688	4.054
Sant Feliu de Llobregat	827	3.627	4.002
Sant Joan Despí	1.100	3.243	3.51
Sant Just Desvern	576	5.485	6.164
Sant Vicenç dels Horts	912	2.699	3.014
Santa Coloma de Cervelló	1.257	2.981	3.309
Santa Coloma de Gramanet	736	2.065	2.267
Tiana	1.856	4.125	4.54
Viladecans	1.323	2.697	3.03

Por tanto, en el inicio de esta actualización es un objetivo tan obvio como ineludible conseguir los soportes magnéticos correspondientes y una aplicación informática que permita utilizarlos y modificarlos.

En la medida de que lo que se quiere conseguir es una base de datos, útil para todas las Administraciones Públicas y también para particulares, esta adecuación de soportes es absolutamente irrenunciable.

Operación de revisión masiva, con efectos inicialmente previstos 91

Detectada, entonces, la necesidad de actualizar la información, adaptar los datos económicos a la nueva normativa, y los soportes a las posibilidades de las nuevas tecnologías se puso en marcha la primera fase de lo que llamamos «la segunda revisión».

Conjugando la capacidad de actuación de las Gerencias, las primeras voluntades municipales, y los desfases existentes, se preparó un plan de actuación con efectos inicialmente previstos para el ejercicio 91 que a nivel del ámbito de actuación del CGCCT (todo el territorio excepto el País Vasco y Navarra) englobaba 440 municipios y 13.000.000 unidades (recuérdese que el total de unidades son 20.665.000) de los cuales 58 municipios y 1.657.000 unidades eran de Cataluña y 9 municipios y 985.000 unidades correspondían al territorio de la antigua Corporación Metropolitana.

En principio estaba previsto que los nuevos valores catastrales entraran en vigor junto con la reforma fiscal, integrándose dentro de ésta el 1 de enero de 1991.

Este planteamiento, además de responder a una lógica indiscutible, tenía la ventaja fundamental de permitir la evidente demostración de que detrás de la revisión de valores no existía un mero afán recaudatorio, demostración que podría ser inequívoca a partir de la modificación de tipo y otros elementos tributarios.

Posibles soluciones estudiadas se encaminaban hacia la modificación a la baja del porcentaje de valor catastral, y a computar como ingresos en el caso del IRPF y la elevación del mínimo exento en el Impuesto del Patrimonio.

La recaudación global que el Estado obtuviera por estos conceptos y causas podría ser la misma, lo que sí variaría sería la participación individual en la recaudación global que, en términos generales, sería más equitativa.

De hecho, si el motor de esta operación hubiera sido exclusivamente recaudatorio, existen diversas vías alternativas mucho más sencillas, fáciles, discretas y económicas para conseguirlo, bien un incremento lineal de los valores catastrales, a través de la publicación del coeficiente de actualización en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o a través de la modificación de tipos. El inconveniente que presentan

estos sistemas es que perpetúan el inequitativo mapa de los valores existentes, que es precisamente el fundamento de la operación.

En el ámbito de la tributación autonómica y local, respecto a la cual el Estado no tiene competencias que permitan determinar la cuota, el razonamiento es similar.

Las correspondientes administraciones gozan de instrumentos suficientes para establecer una variación de cuota al margen de las modificaciones de valor catastral.

A pesar de todo esto, razones de diversa índole, por todos conocidas y que no corresponde analizar, determinaron en la fase final de la operación su aplazamiento.

Efectos de la paralización de las notificaciones de valor

Al margen de efectos internos dentro de la estructura del Centro y relacionados con la dificultad de adaptar una información preparada para unos objetivos a otros sobrevenidos con posterioridad y cuando el tratamiento de la información estaba prácticamente ultimado, existe una serie de efectos más generales y externos que son los realmente relevantes, la importancia y la transcendencia de los cuales depende fundamentalmente del tiempo que dure el aplazamiento establecido, y que entre otros son los siguientes:

Desigualdades existentes

El trabajo realizado, de estudio profundo del mercado inmobiliario, de su comportamiento y de su relación con la valoración catastral nos ha puesto de manifiesto la existencia de grandes desigualdades en la relación valor catastral-valor de mercado. Estas desigualdades se producen a dos niveles, entre municipios y entre diversas zonas de un mismo municipio.

Las diferencias motivadas por la evolución no lineal del mercado inmo-

biliario, generan claras situaciones de inequidad en la fiscalidad derivada del Catastro, fundamentalmente del IBI y el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el IRPF, el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Transmisiones y el Impuesto sobre Sucesiones.

Las zonas en que la presión alcista de los precios de mercado ha sido más importante, son en este caso las más beneficiadas a nivel tributario y disfrutan particularmente con esta paralización, ya que contribuyen menos que proporcionalmente a las correspondientes cargas fiscales.

Previsiones normativas

Hay una serie de normas redactadas sobre la base de los valores catastrales modificados. Su paralización complica extraordinariamente la obtención de resultados lógicos.

- *Ley 38/88 Reguladora de las Haciendas Locales. Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana*

La ley establece en su artículo 108.3, literalmente: «En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tenga fijado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles», es decir, el valor catastral del terreno correspondiente.

La banda de tipo a aplicar por parte del Ayuntamiento es suficientemente estrecha como para que una variación significativa de los valores catastrales, afecte sustancialmente la capacidad recaudatoria del impuesto, sobre todo si tenemos en cuenta que una parte importante de los incrementos de valor derivados de la operación paralizada, era debida a la evolución del valor del suelo.

- *Ley 8/90 de Reforma del Régimen Urbanístico y de Valoraciones del Suelo*

En este caso tan sólo hemos de tener en cuenta dos aspectos, en si, bastante elocuentes y por tanto no necesitan demasiados comentarios:

a) La Ley 8/90 es de fecha 25 de julio de 1990, publicada en el BOE el 27 del mismo mes y año.

En este momento, la legislación que ampara y obliga a unas valoraciones catastrales relacionadas con el mercado ya está en vigor. (Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales), y la operación de modificación masiva de valores catastrales está ya en su fase final.

En estas circunstancias es normal pensar que el legislador tiene en cuenta el marco legislativo general y las operaciones en marcha que han pasado ya sus primeras fases de aprobación de Ponencias, exposición al público, etc.

b) La lectura de algunos párrafos de su Exposición de Motivos es suficientemente clarificadora, por esta causa se transcriben a continuación:

Parágrafo III.4 del preámbulo: «En materia de valoraciones, la legislación y ordenación urbanísticas deben suministrar solo los aprovechamientos susceptibles de adquisición, correspondiendo la valoración de éstos a las normativas fiscales (...)».

«Se conseguirá así coordinar urbanismo y fiscalidad, garantizándose la aplicabilidad de los criterios valorativos fiscales (...)».

Parágrafo VI del mismo preámbulo: «El derecho al aprovechamiento urbanístico se valora por aplicación del valor fiscal, que se obtiene (...)».

De este modo se consagra el criterio de que la legislación y el planeamiento urbanístico suministran sólo aprovechamientos, mientras que su valoración concreta es función de la normativa fiscal. Es obvio que el adecuado funcionamiento del sistema, y lo que es más importante, su justicia material, dependen de la corrección de las valoraciones fiscales (...).

Para cerrar esta referencia al régimen de valoraciones, conviene destacar otra novedad de la ley que puede reportar grandes ventajas prácticas. Se trata de la aplicación de estos criterios de valoración a todas las expropiaciones que se lleven a cabo por los poderes públicos, tanto si se enmarcan dentro de la ejecución del planeamiento urbanístico como si tiene su amparo en cualquier otra normativa. Tratándose siempre

de expropiación del suelo cuya valoración fiscal debe estar determinada según lo señalado anteriormente, no parece lógico ni justo aplicar criterios de valoración diferentes en función del carácter «urbanístico» o no de la expropiación. El dato meramente formal de la legislación que regule el supuesto expropiatorio no tiene que tener consecuencias a la hora de fijar el equivalente económico de objeto expropiado, cuando éste es el mismo en todos los casos».

Perspectivas de futuro

Analizar cuáles son o pueden ser las perspectivas de futuro más o menos inmediato, pasa indiscutiblemente por reestudiar, redefinir e incluso por consensuar qué se quiere que sea el Catastro.

En el marco de la normativa actual, esta determinación de finalidad ya ha sido realizada, de manera que salvando modificaciones normativas, que reflejen cambios de orientación política, hemos de entender el Catastro como un conjunto de información respecto a las características físicas, jurídicas y económicas de la propiedad inmobiliaria, como una Base de Datos que recoge esta información, que se constituye como un servicio público, útil para las diferentes administraciones y, con las limitaciones derivadas del derecho a la intimidad, constitucionalmente reconocido, útil también para particulares.

Desde este punto de vista, es imprescindible que la información recogida responda a la realidad en su triple aspecto, características físicas, jurídicas y económicas. Por tanto, las posibilidades de futuro, son relativamente limitadas y bajo mi punto de vista pasan por una revitalización de las operaciones de revisión, manteniendo su esencia, junto con la posibilidad de reconsiderar y acordar con otras administraciones e interlocutores sociales aspectos puntuales y de procedimiento.

Aspectos esenciales

Algunos de los aspectos que vienen a continuación, ya han sido tratados, pero se exponen para que el análisis no

pierda coherencia, para mantener la imagen de globalidad.

Estos puntos son:

- Por un lado, inclusión de todas las fincas. El Catastro es básicamente un conjunto de información respecto a la estructura inmobiliaria que tiene el carácter de exhaustivo, es decir, cubre todo el territorio excepto Navarra y el País Vasco.

Es, además por su propia naturaleza, dinámico, ya que algunas actuaciones de planeamiento provocan trasposos del Catastro Rústico al Urbano y viceversa.

- Por otra parte, adecuación de las características físicas y jurídicas.

No es suficiente que estén recogidas todas las fincas, es imprescindible que los datos que se incorporan, respondan a la realidad. Ésta, entre otras cosas, supone que tanto los aspectos jurídicos (propiedad, existencia de derechos reales o concesiones administrativas, etc.) como los físicos (superficie de solar, superficie construida, año de construcción, estado de conservación, etc.) sean ciertos

- y finalmente, homogeneidad de los aspectos económicos. Por las razones expuestas anteriormente, vinculadas al cumplimiento de la legalidad y a la voluntad de asumir un mayor grado de equidad, es evidente la necesidad de modificar los valores catastrales de tal manera que respondan a un criterio de relación con el valor de mercado único y homogéneo.

Aspectos a estudiar y consensuar

Junto con los temas anteriormente expuestos, que constituyen la columna vertebral de lo que es el Catastro, derivado directamente de lo que dispone la Ley 39/88, aparecen otros, de aspecto más puntual, pero igualmente importantes que podrían ser objeto de discusión y debate tanto con las administraciones implicadas como con determinados agentes con representatividad social.

Este segundo nivel está constituido por diferentes aspectos, susceptibles de

ser agrupados en tres grandes bloques de decisiones: Qué, Cómo, Cuándo.

Qué

En este apartado podemos incluir tanto lo que se ha de entender como valor de mercado, qué porcentaje de este valor ha de representar el valor catastral, el procedimiento a seguir en casos de conflicto (el particular entiende que su valoración supera el valor de mercado) y el tratamiento de determinadas situaciones especiales, como son las Viviendas de Protección Oficial o las fincas con alquileres congelados.

a) Qué se entiende como valor de mercado.

Evidentemente y contra lo que muchos particulares alegaron en el momento de las notificaciones individuales de valor posteriormente anuladas, el valor de mercado no tiene que identificarse con la contrapartida económica de cada una de las transacciones realizadas, y esto por diversas razones:

- en operaciones concretas, pueden existir condicionantes subjetivos del comprador o del vendedor que den lugar a transacciones equivocadas;

- la determinación de la variación del valor desde el momento en que se realizó la compraventa por parte de un particular, es difícil de cuantificar por un ciudadano normal, que tiene relaciones muy puntuales con el mercado inmobiliario;

- por naturaleza, la valoración catastral tiene dos características que la definen y hasta cierto punto la condicionan: es una valoración periódica, que se realiza anualmente, y masiva, que afecta la totalidad de los bienes inmuebles, hayan sido objeto o no de transacción en un período concreto. Estas circunstancias la hacen sustancialmente diferente a las tasaciones individuales.

Estos motivos apuntan al hecho de que, a efectos de Catastro, podamos entender el valor de mercado como la estimación del precio de compraventa más probable, obtenido a partir de la aplicación de técnicas y métodos esta-

dísticos, sobre la base de operaciones efectivamente realizadas en cada una de las zonas de valor en que se divide el territorio.

b) Qué porcentaje de valor de mercado tiene que representar el valor catastral.

Este porcentaje podría ser tanto el 70% como cualquier otro. Lo que es realmente relevante es que esta cifra sea constante a lo largo del territorio, de manera que no se produzcan situaciones de inequidad y descoordinación.

En el momento de su determinación se tendría que tener en cuenta tanto el tipo de norma que puede realizar una formulación de esta naturaleza (circular, resolución decreto, orden, ley, etc.), de manera que tenga la cobertura jurídica suficiente, como que el valor resultante tiene diversos efectos tanto tributarios (renta, patrimonio, transmisiones, IBI, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana, etc.) como extratributarios (indemnización en casos de expropiación), hechos que deberán considerarse, bien en el momento de establecer el porcentaje, bien en la normativa que regula los aspectos anteriormente enunciados.

c) Establecimiento de actuaciones para realizar en casos de conflicto.

La sistemática de valoración catastral se articula alrededor de la «Ponencia de valores» que realiza una división del territorio, determina para cada zona y cada uno de los usos permitidos por el planeamiento un valor en ptas./m² y define los criterios de valoración tanto de suelo como de construcción. Se configura como la norma que regula qué y cómo se valorará.

Este documento, eje de las actuaciones posteriores, determina los valores sobre la base de las observaciones de mercado realizadas.

Por este motivo, excepto errores materiales más o menos evidentes, es realmente difícil para el contribuyente fundamentar los recursos que puedan interponerse, incluso en la hipótesis, que teóricamente debe estar prevista, de

existencia de errores en el estudio de mercado, ya que:

- difícilmente podrá presentar un estudio alternativo, y en el caso de poderlo hacer, no hará referencia al mismo momento temporal (desde que finaliza el estudio de mercado hasta el momento en que se acaba la elaboración de la Ponencia y se procede a su publicación, evidentemente pasa un período de tiempo);

- la declaración de la contrapartida económica de una compraventa concreta, lógicamente no sería elemento suficiente, tanto por el aspecto singular de la misma operación, como por la dificultad de acreditar de manera fehaciente el precio satisfecho;

- ordinariamente el contribuyente interpone los recursos no en el momento de aprobación de la Ponencia sino, cuando recibe la notificación individual de valores; en este caso, los temas se complican, ya que de poder acreditar y estimar el recurso interpuesto por el contribuyente, esta estimación tan sólo podría producir efectos sobre el acto de valoración individual objeto de recurso.

La falta de regulación normativa expresa, de doctrina, y jurisprudencia en este sentido, hacen de éste un tema digno de reflexión.

d) Tratamiento de situaciones especiales.

Partimos de la base —hecho que por otro lado también podrá dar lugar a discusión— de que determinadas situaciones merecen un tratamiento diferenciado.

Se engloban aquí, tanto las Viviendas de Protección Oficial como las fincas alquiladas, sujetas a prórroga forzosa (coeficientes O y M de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989, que aprueba las normas técnicas de valoración y el cuadro-marco de valores del suelo y de las construcciones, para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles).

La opción de identificar el valor catastral con el precio máximo de venta fijado administrativamente en el caso de las Viviendas de Protección Oficial, plantea algunos inconvenientes.

Uno de los más importantes es la captura inicial de la información relativa a cuáles son los inmuebles afectados y su precio, ya que la mayoría de Comunidades Autónomas no disponen de esta información completa en soporte magnético y el identificador que utilizan es diferente a la referencia catastral, utilizado por el Estado.

En ocasiones el resultado de la aplicación de este coeficiente es sorprendente, ya que genera unos valores totales inferiores a los del terreno sobre el que se construye el inmueble.

Finalmente distorsiona de manera muy significativa el mapa de los valores del territorio.

En las viviendas sometidas a prórroga forzosa, partiendo de la base de que este hecho disminuye su valor, se aplicaba un coeficiente reductor único del 0,70.

En este caso subsiste la dificultad de captar inicialmente esta información, a la que se añade el problema de su mantenimiento. Es difícil acreditar de manera inequívoca esta circunstancia, variable a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la justificación teórica de este coeficiente reductor único, es difícilmente asumible, ya que, si lo que se pretende es asociar el valor del inmueble a su rendimiento presente —criterio que no se mantiene en ningún otro supuesto— lo procedente sería la capitalización de rentas, a un tipo de interés a determinar. Procedimiento que si bien puede tener su lógica a nivel teórico, tiene evidentes complicaciones de aspecto práctico, para obtener resultados satisfactorios en las valoraciones periódicas y masivas que constituyen el Catastro.

Si lo que se piensa, tanto en el caso de VPO como en viviendas con prórroga forzosa, es que merecen un tratamiento fiscal diferenciado, sería mucho más lógico que las medidas correspondientes se articularan dentro de mecanismos puramente tributarios: base liquidable, exenciones, bonificaciones, etc.

Cómo

El conjunto de actividades y trabajos que constituyen la revisión del Catastro, entendida en los términos hasta ahora expuestos, se vertebran alrededor de una pieza clave: la Ponencia de valores.

Su origen es el análisis del mercado inmobiliario y del planeamiento, y ofrece como fruto una serie de documentos, tanto gráficos como alfanuméricos, que definen el valor en ptas./m² del suelo y las normas y los criterios de aplicación de estos valores a las características concretas de las fincas tipo. Estos criterios hacen referencia tanto al suelo como a la construcción.

A partir de aquí, el proceso de valoración individual de los inmuebles y la distribución del valor global entre las diferentes unidades urbanas que lo componen (por ejemplo, los diferentes pisos de una finca en régimen de propiedad horizontal) tiene que ser, forzosamente, tan sólo el ejercicio, más o menos complejo, de una facultad reglada, exenta de discrecionalidad por parte del gestor, un acto administrativo de ejecución.

La bondad del resultado final depende tanto de la correcta confección de la Ponencia (captación y análisis del mercado y del planeamiento, y establecimiento de criterios de valoración) como de la exactitud de los datos físicos de los bienes recogidos en nuestra Base de Datos.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales atribuye a la Administración del Estado las competencias vinculadas a la gestión catastral, pero admite expresamente la colaboración de las Entidades Locales en estos trabajos.

Esta colaboración, reconocida a nivel normativo, es deseable por diversas razones:

- el municipio es la entidad básica de organización territorial del Estado, y uno de sus elementos es el territorio (art. 11 de la ley 5/86 de Bases de Régimen Local);

- el planeamiento urbanístico, esencial dentro de la gestión catastral, tiene

su origen en el mismo municipio (art. 25 de la mencionada ley);

- una parte importante de las competencias locales tiene relación directa con el territorio.

Todas estas circunstancias inducen un conocimiento importante de la base inmobiliaria y de su evolución.

Por otro lado, no tenemos que olvidar que el valor y la gestión catastral inciden plenamente en la financiación local, al ser referencia de dos de sus tributos básicos: el IBI o Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, antigua plusvalía.

Bajo estas premisas parece evidente la necesidad de contar con una colaboración leal y efectiva por parte de la Administración Local, atendido a su conocimiento del territorio y a la implicación directa que tiene con aspectos derivados del Catastro. Colaboración que podría hacerse extensiva a otras administraciones y agentes con representación social. De esta manera podríamos conseguir obviamente, tanto un Catastro mejor, como un mayor y mejor conocimiento de cuáles son las causas que aconsejan la revisión y cuáles son los efectos que, en todos los ámbitos, produce.

Elementos imprescindibles para poder trasladar a la sociedad las causas que justifican la operación y proceden de manera simultánea al estudio y al inicio de trámites para efectuar las correspondientes modificaciones en las normas que regulan la tributación estatal, autonómica y local vinculada al Catastro. Evidenciando la neutralidad fiscal del Catastro en sus términos generales y su aspecto instrumental para conseguir una distribución más equitativa y progresista de la carga fiscal.

Dentro de esta línea de reconsideración apuntada, podríamos también englobar una serie de aspectos puntuales pero importantes.

El primero de éstos podría ser, una vez establecida cuál es la función genérica del Catastro, determinar la infor-

mación realmente relevante para dar cumplimiento a sus finalidades, tanto tributarias como extratributarias.

Este ejercicio se realizó a principios de la década de los 80, en un momento en que la valoración tenía un aspecto exclusivamente administrativo y el Catastro una única finalidad de dar soporte a parte de la tributación sobre inmuebles.

Actualmente esta filosofía ha cambiado, y es procedente analizar tanto el grado de adaptación de la información que tenemos a los nuevos objetivos, añadiendo la que pueda ser relevante y suprimiendo la supérflua, como el procedimiento de valoración, ya que el valor catastral ha pasado a ser reflejo de una situación determinada externamente por el mercado.

Seguramente un altísimo porcentaje de este valor de mercado podría ser explicado por un conjunto muy reducido de variables. De confirmarse esta hipótesis por métodos estadísticos y económicos, valdría la pena plantearse la modificación tanto de las fórmulas de valoración como de la estructura de la base de datos.

Esta simplificación nos permitiría, tanto una mejor comprensión, por parte de todos, del procedimiento, como lo que quizás es todavía más importante, poder garantizar el mantenimiento de la información, objetivo absolutamente irrenunciable, con unos costes razonables.

Otro aspecto a analizar es el procedimiento establecido en la Ley Reguladora, de notificación individual de valores catastrales, previa a sus efectos.

La idea que inspira esta obligatoriedad es el conocimiento previo por parte del contribuyente del valor catastral asignado a su finca y es absolutamente razonable.

El problema se presenta cuando analizamos la norma que regula esta notificación, es decir, la Ley de Procedimiento Administrativo, que redactada en 1958, parece inspirada por una realidad económico-social diferente a la actual. Parece dirigida más a actuaciones

puntuales que masivas como la revisión, en un contexto en que la incorporación de la mujer al trabajo no era tan general como ahora, el núcleo familiar estaba integrado no tan sólo por padres e hijos, sino también por los abuelos, y en las ciudades existían en muchas fincas porteros. En estas circunstancias era razonable el cumplimiento de notificación individual en los términos legalmente previstos.

La realidad actual es esencialmente diferente, y según datos concretos del ámbito metropolitano, su eficacia en pocas ocasiones supera el 50% y genera unos costes muy importantes.

Con estos datos en mano, parece razonable intentar modificar el sistema de notificación estableciendo alternativas de procedimiento, que sin implicar una disminución de garantías para el ciudadano permitan conseguir el objetivo con mayor eficacia y un coste inferior.

Cuándo

La determinación del momento en el que se han de reiniciar estas operaciones, depende de muchos factores de diversa naturaleza, pero convendría tener en cuenta diferentes aspectos.

El mapa de valores catastrales relativos actuales no se ajusta a las proporciones que guardan los valores de mercado, con los problemas que comporta.

Sería conveniente tener claramente dibujado y definido el marco fiscal de los bienes inmuebles, una vez entren en vigor los nuevos valores catastrales, para no favorecer la aparición de especulaciones respecto a hipotéticos incrementos de presión fiscal.

Finalmente, aunque la norma establece que los ámbitos de actuación pueden ser municipales o inframunicipales, convendría reconocer que, en determinadas circunstancias, la realidad hace que existan espacios supramunicipales con fuertes vinculaciones físicas, económicas, sociales y laborales entre las comunidades que las integran y con una entidad diferente a la de cada una de las partes que la componen. Por un

principio de coherencia y coordinación, a nivel catastral (estudios de mercado y fechas de entrada en vigor de los valores, fundamentalmente) tendríamos que tratarlos como esta unidad que en realidad son.

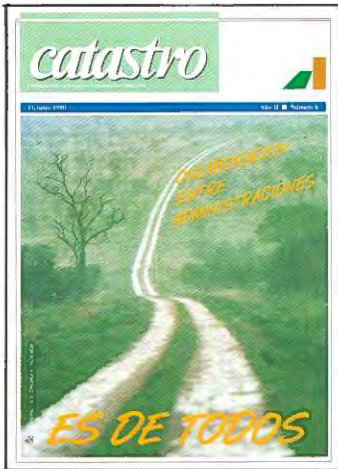
Me refiero, evidentemente a los municipios existentes alrededor de las grandes ciudades, que junto con ésta dan lugar a los ámbitos metropolitanos, dentro de los cuales aparecen las interrelaciones señaladas, esenciales para entender tanto el diseño de territorio que establece el planeamiento, como el comportamiento del mercado inmobiliario, elementos básicos de las actuaciones catastrales. ■

Inmaculada Turú

*Gerente Territorial
del Ámbito Metropolitano
de Barcelona*

C A T A S T R O

Revista del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.



Número 6
Octubre 1990
Colaboración entre
Administraciones: es de todos

Número 7
Enero 1991
El suelo: Viejos problemas,
nueva ley

Número 8
Abril 1991
Cartografía

Número 9
Julio 1991
Más allá del valor

Número 10
Octubre 1991
Arrendamientos urbanos

Número 11
Enero 1992
Autonomía local y Hacienda
local

Número 12
Abril 1992
El Catastro en Latinoamérica

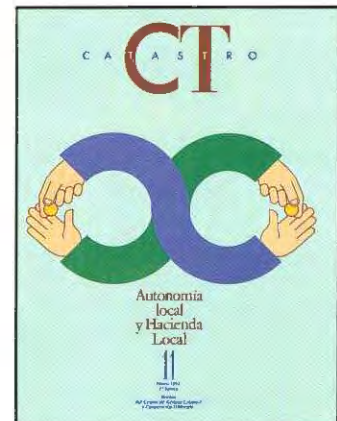
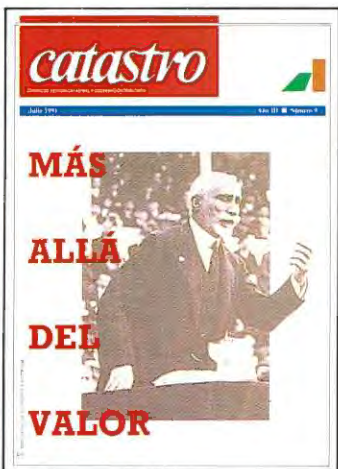
Número 13
Julio 1992
Valoraciones y estudios
de mercado

Número 14
Octubre 1992
Impuestos sobre Bienes
Inmuebles

Venta y suscripciones
Centro de Publicaciones del
Ministerio de Economía y
Hacienda:
Plaza del Campillo del Mundo
Nuevo, 3. 28005 Madrid
Tfno.: 525 14 37

Información y venta:
Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria.
Subdirección General de
Estudios y Estadística
Catellana, 272. 2.ª planta
28046 Madrid
Tels.: 733 91 97 y 583 66 93

Publicaciones
La Subdirección General de
Estudios y Estadística edita,
además de la revista, Manuales,
Estudios y Monografías sobre
temas relacionados con el
Catastro. Solicite información



Agricultura y Sociedad

Una revista trimestral, de ciencias sociales
sobre la agricultura, la pesca y la alimentación

OCTUBRE  DICIEMBRE
1991

ENERO  MARZO
1992

ESTUDIOS

PERE MIR

Aspectos metodológicos y teóricos de la función de producción agraria.

M^a TERESA PEREZ PICAZO

Riqueza territorial y cambio agrícola en la Murcia del siglo XIX. Aproximación al estudio de una contabilidad privada (Circa 1800-1902).

RAFAEL VALLEJO POUSADA

Desamortización de Mendizábal y transformación del régimen de propiedad de la tierra: la redención de censos como vía formal. Pontevedra 1836-1843.

JOAQUIN A. MILLAN

Relaciones dinámicas entre precios agrícolas e industriales y dinero en España.

FEDERICO AGUILERA KLINK

¿La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la malinterpretación en economía?

NOTAS

NELLY JAZRA BANDARRA

Los elegidos de la reforma de los fondos estructurales.

VICENTE PEREZ MOREDA

Alimentación, desnutrición y crecimiento económico. El hambre en la historia.

ENRIC SAGUER Y PERE SALA

Un nuevo campo de estudio: la Historia ecológica.

BIBLIOGRAFIA

I. **Crítica de libros:** TOMAS GARCIA AZCARATE: «La exportación a través de los fondos comunitarios de desarrollo»; «Matières premières et commodités»; «Le Krach alimentaire. Nous redeviendrons paysans». ANTONIO SEGUI NAVARRO: «El Pirineo español». MARIANO PESET: «El mayorazgo en la historia económica de la región murciana, expansión, crisis y abolición (s. XVII-XIX)». JESUS MILLAN: «Capitalismo y renta propietaria: la agricultura gerundense en el tránsito al liberalismo. Els propietaris i els altres». PEGERTO SAAVEDRA: «O monte en Galicia».

II. Revista de libros. III. Revista de Revistas. Convocatorias.

ESTUDIOS

CECILE BERNARD Y ODILE HOFFMAN

La seguridad alimenticia en zona de plantación de café, intervención estatal y estrategias campesinas (Veracruz, México).

JOSE MARIA GARCIA ALVAREZ-COQUE

Factores determinantes del gasto público agrícola de las Comunidades Autónomas.

JESUS MARIA GARAYO

Deforestación del territorio: el hayedo de los montes de la Parzonería General de Encía (siglos XVIII-XX).

PEGERTO SAAVEDRA

La economía vitícola en la Galicia del Antiguo Régimen.

M^a DOLORES GARCIA RAMON

Desarrollo y tendencias actuales de la geografía rural (1980-1990). Una perspectiva internacional y una agenda para el futuro.

NOTAS

PABLO CAMPOS PALACIN

Reunión internacional sobre sistemas agroforestales de dehesas y montados.

LUIS ENRIQUE ALONSO

Un viaje hacia la cara oscura de la modernización. Notas a propósito de dos estudios modélicos sobre desarrollo regional.

BIBLIOGRAFIA

I. **Crítica de libros:** ADELA GARCIA MUÑOZ: «Labor, markets and agricultural production». CARLOS ROMERO: «Multicriterion optimization and its utilization in agriculture». TOMAS GARCIA AZCARATE: «The world beef market. Government intervention and multilateral policy reform». A. M. BERNAL: «Cañadas, cordeles y veredas». JUAN A. ORTEGA Y MEDINA: «México prehispánico, evolución ecológica del Valle de México».

II. Reseña de libros. III. Revista de Revistas. Informaciones y convocatorias.

Director: *Cristóbal Gómez Benito*.

Edita: *Secretaría General Técnica
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.*

SUSCRIPCION ANUAL PARA 1992

— España 5.000 ptas.
— Estudiantes 3.500 ptas.
— Extranjero 6.500 ptas.
— Número suelto 1.500 ptas.

Solicitudes: A través de librerías especializadas o dirigiéndose al Centro de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Paseo de la Infanta Isabel, nº 1, 28071 - MADRID (ESPAÑA).

INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA

UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ



Fotogrametria assistida

La restitució fotogramètrica és mecanitzada de manera integral; inicia així la mecanització de la delineació.



Edició digital

L'edició digital s'efectua a través del sistema gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar i controlar els vols fotogramètrics, etc.

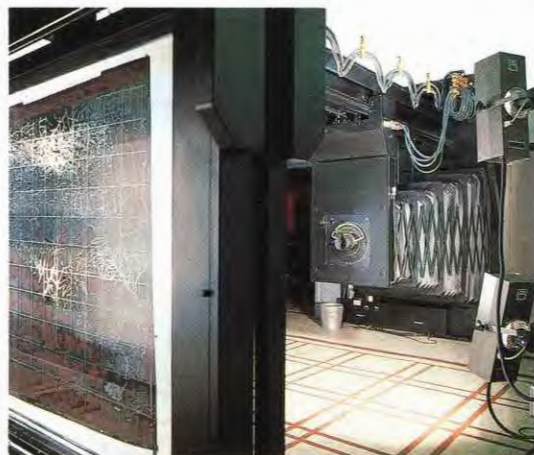
Teledetecció

Les imatges emeses des de satèl·lit són rebudes per un sistema de procés d'imatges digitals en color que permet d'una forma directa diferents tractaments de les mateixes.



Centre de càlcul

El Centre de càlcul, proveït de xarxes de sistemes cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge, constitueix la infraestructura que permet el tractament de totes les dades necessàries per a l'elaboració de la cartografia.



Laboratori

El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes processadores i cambres de precisió, permet la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica.



- Mapes topogràfics
- Mapes temàtics
- Mapes de carreteres
- Mapes i guies turístiques
- Mapes i guies excursionistes
- Plans de ciutats
- Ortofotomapes
- Fotografia aèria
- Llibres de contingut geocartogràfic
- Atlas
- Publicacions de la Generalitat
- Diverses publicacions oficials de l'estat



Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya

Balmes, 209-211 - Telèfon (93) 218 87 58
Tèlex 98471 ICCBE - Fax 218 89 59 - 08006 Barcelona

31 REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES

2ª EPOCA Septiembre-Diciembre 1991

SUMARIO

ANALISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

- Isidoro Moreno** Desarrollo del capitalismo agrario y mercado de trabajo en Andalucía.
- Fernando Oliveira-Baptista** Los asalariados agrícolas, el trabajo y los territorios. El caso portugués.
- Luis Garrido y Juan Jesús González** El mercado de trabajo agrario: algunas cuestiones metodológicas y discusión de resultados.
- Lucilla Castelucci y María Giusseppina Eboli** La definición estadística de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo rural.
- Alfonso de Barros** Trabajo en el Espacio Social Rural.
- Lina Gavira** La estructura segmentada del mercado de trabajo rural en Andalucía.
- Luis Toharia** El mercado de trabajo español: algunos datos y estudios.
- Enrico Pugliese** Dos Italias en dos Europas: Mercado de trabajo y estructura laboral en el Sur con referencia al marco europeo.
- Carlos Giménez Romero** Trabajadores extranjeros en la agricultura española: enclaves e implicaciones.

POLITICAS RELACIONADAS CON EL MERCADO DE TRABAJO Y EL DESARROLLO RURAL. LA CEE Y EL MERCADO DE TRABAJO RURAL

- F. Miguez y O. Rebollo** Mercado de trabajo en el Sur de Europa. Políticas de empleo en España.
- Enzo Mingione** Paro, subempleo, trabajo negro e informal en el sistema socio-económico del sur.
- Maxime Haubert** Empresas de trabajo asociado y creación de empleo. Apuntes teóricos.
- Pablo Palenzuela** El Estado no inocente: naturaleza perversa y eficiencia de la política asistencial en el medio rural andaluz.
- Matilde Raspini** La intervención del Estado italiano en el Mercado del Trabajo Rural: Asistencia y Formación.
- Aldo Pugliese** Desarrollo autopropulsor y desarrollo inducido en el sur de Italia.
- Eduardo Sevilla Guzmán** Una propuesta de desarrollo rural endógeno para Andalucía.
- Tomás García Azcarate** La reforma de la política agraria de la comunidad: repercusiones en las zonas meridionales de Europa.

Edita: REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES. UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA
Secretaría: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga
El Ejido • 29071 Málaga • ☎ 13 12 97

BANDO

Revista del Ministerio
para las
Administraciones
Públicas



La Revista de la Administración local

Municipios y provincias,
protagonistas de la información

Revista mensual.

Edita el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP),
con la colaboración del Banco de Crédito Local.

Dirección: Santa Engracia, 7 - 28010 Madrid. Teléf. 91/446 17 00 - 446 17 04. Telefax.: 445 08 39

Suscripción anual: 2.000 pesetas

La Unión entre los Poderes Locales



Desde que en 1980 un grupo de Alcaldes constituyesen la FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, esta organización se ha distinguido en la defensa de los intereses locales:

Actuando como interlocutor
ante las demás Administraciones Públicas.

Trasmitiendo las propuestas de las Corporaciones Locales
para la elaboración de leyes y normas que les afectan.

Colaborando en la formación e intercambio de experiencias
entre representantes políticos locales.

Representando a las Corporaciones Locales Españolas
en organizaciones internacionales,
especialmente como SECCION ESPAÑOLA del
CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA.

Siendo el lugar de encuentro para mejorar la comunicación
entre los pueblos y la UNION ENTRE LOS PODERES LOCALES.



FEDERACION ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS



CONSEJO DE MUNICIPIOS
Y REGIONES DE EUROPA
SECCION ESPAÑOLA

INDICE

INTRODUCCION 7

ESTUDIOS

Ciencia Regional

La política regional comunitaria y los Fondos Estructurales ante el Mercado Unico	17	Laureano Lázaro Araújo
Difusión espacial de la robótica en España	43	Angel Martínez Sánchez
Comportamiento locacional de la inversión acogida a incentivos regionales en España	63	J. Olga Ogando Canabal Beatriz Rodríguez Prado
La política regional comunitaria en la zona objetivo nº 2 en Cataluña	87	Lourdes Viladomiu Canela Jordi Rosell Foxá

Planificación y desarrollo

Administraciones locales y desarrollo endógeno	103	Gustavo Rego Veiga
--	-----	--------------------

Urbanismo

El sistema urbano de México: organización, crecimiento y estructura funcional	115	Carlos Garrocho Rangel
Puçol: Historia del proceso de «urbanización de una playa»	139	Just Ramírez Palomar Fernando Gaja Díaz

Medio ambiente

Medio ambiente y gasto público	173	Victoriano Sierra Ludwig
--------------------------------	-----	--------------------------

DOCUMENTACION JURIDICA

Legislación nacional	
Normativa estatal	193
Normativa autonómica	194

LIBROS Y REVISTAS

Reseñas	201
Reseñas	213
Sumarios	227

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Agustín de Bethencourt, 25 - 28071 MADRID-España

	Pesetas	
	España	Extranjero
Suscripción anual	4.000	5.000
Ejemplar	1.500	2.000

CIUDAD Y TERRITORIO

CIUDAD Y TERRITORIO



CIUDAD Y TERRITORIO es una publicación trimestral del INAP que desde hace más de 20 años se propone transmitir las reflexiones teóricas, los estudios y las experiencias más relevantes del urbanismo y la gestión municipal, con especial atención al entorno europeo y latinoamericano.

Con un importante apoyo gráfico e ilustraciones y con la colaboración de un equipo de expertos y corresponsales, CIUDAD Y TERRITORIO intenta, a través de sus casi 100 números editados, ser un instrumento útil, tanto para aquéllos que planifican y gestionan la ciudad como para los que reflexionan sobre el hecho urbano.

Cada edición de CIUDAD Y TERRITORIO se completa con información bibliográfica y recopilación documental sobre los temas más relevantes abordados en el número.

CIUDAD Y TERRITORIO



CIUDAD Y TERRITORIO



CIUDAD Y TERRITORIO



DIRECCION: Carmen Gavira Golpe. DIRECTOR ADJUNTO: Joaquín Jalvo Mínguez. SECRETARIA DE REDACCION: Mercedes de Lope Reboillo y Luis Sanz Fernández.

CONSEJO DE REDACCION:

PRESIDENTE: José Constantino Nalda García, Presidente del INAP. VOCALES: Angel Aparicio Mourelo, Antonio Bonet Correa, Antonio Fernández Alba, Ramón Ganyet Solé, Javier García-Bellido García de Diego, Eduardo García de Enterría, Carmen Gavira Golpe, Josefina Gómez Mendoza, Fernando González Bernaldez, Jorge-Enrique Hardoy, Laureano Lázaro Araujo, Jesús Leal Maldonado, Ramón López de Lucio, Santos Madrazo Madrazo, Angel Menéndez Rexach, Luis Moya González, Manuel Ribas Píera, Javier Russinés y Torregrosa y Carlos Sambricio Echegaray.

COLABORADORES CORRESPONSALES:

Gustavo Bacacorzo (Perú), Giuseppe Campos Venuti (Italia), Thomas F. Glick (América del Norte), Alicia-Maria González (América del Norte), Maruja Gutiérrez (Bélgica), Samuel Jaramillo (Colombia), Claude Lelong (Francia), Rubén Pesci (Argentina), Nuno Portas (Portugal), José Luis Ramírez González (Suecia), Juan Rodríguez Lores (Alemania) y Roberto Segre (Cuba).

EDITA: MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

Depósito legal: M. 10422-1970
CODEN: CITEEL
ISSN: 0210-0487
NIPO: 329-89-013-X

DIRECCION, REDACCION Y ADMINISTRACION:
Santa Engracia, 7.
28010 MADRID

Tel: (91) 446 17 00
FAX: (91) 445 08 39.

Suscripción anual: 6.000 ptas. (trimestral).
Número sencillo: 1.500 ptas.
Número doble: 3.000 ptas.
Más 6 por 100 de IVA y 200 ptas. de gastos de envío.

MAP

Ministerio
para las
Administraciones
Públicas

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

CENTRO
DE GESTION
CATASTRAL Y
COOPERACION
TRIBUTARIA



MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA